



## EDITORIAL:

## ESTALLIDO SOCIAL Y EMPLEO ADECUADO DE LA FUERZA<sup>1</sup>

En estos meses, ciertos fenómenos con contenidos de alta conflictividad han acaparado la atención de los medios en nuestra región. En el Perú fue el enfrentamiento entre poderes del Estado que tuvo matices distintos a los que ocurrieron en Ecuador, Chile y Bolivia. En todos ellos, de una u otra manera, el Estado y los manifestantes protagonizaron actos que llevaron al uso de la fuerza.

En nuestro caso, la inesperada violencia de octubre tuvo modalidades consideradas ajenas en muchos sentidos al estilo de protestas sociales tradicionales en Ecuador. Nos preguntamos si estamos ante nuevos fenómenos desconocidos en sus contenidos, límites y contextos subjetivos y objetivos que encajan en cierto modo con los denominados “estallidos sociales” (reconociendo, en todo caso la vaguedad del concepto). Efectivamente, la ciencia social no ha estado preparada para lidiar con fenómenos de este tipo, en términos de su estructura lógica, sus causas, diversidad de manifestaciones y consecuencias a corto o mediano plazo. Por tanto tampoco la sociedad y los estados están preparados para anticipar su ocurrencia y controlar la enorme conflictividad que implica.

Es común que se denomine «estallido social» a una protesta cuando alcanza un pico de intensidad muy fuerte en relación con el alcance de la participación, la multiplicidad de protagonistas y la violencia que ejerce sobre el orden social y político (Farinetti, 2002) al hablar de los piqueteros argentinos que irrumpieron a comienzos de este siglo). Por lo general, fenómenos como estos pueden ser fugaces, con sujetos sociales y liderazgos difícilmente identificables, dada la complejidad de subjetividades en movimiento. Por lo inesperado de su irrupción en un momento determinado -al menos es el caso de las protestas que hemos registrado últimamente en la región y otras que ocurren en el mundo en estos mismos días, como los chalecos amarillos en Francia- suelen tomar por sorpresa al Estado, la sociedad y, por supuesto, a las fuerzas del orden. Cuando no existe la necesaria previsión, lo que queda es la reacción a veces desmesurada y el escalamiento de la violencia por parte de todos los implicados.

Ninguna de las teorías clásicas a disposición de las ciencias sociales, pueden explicar la naturaleza del estallido social, al menos en el contexto pos capitalista y de desglobalización en el que andamos. Ni los paradigmas de la lucha de clase, del conflicto social o de la movilización o acción colectiva, resultan útiles para el caso. Parece difícil encontrar detrás una racionalidad costo-beneficio por parte de actores en proceso de organizar sus reivindicaciones. Casi imposible interpretar alguna unidad de intenciones, ni de sentimientos o emociones en casos que pueden degenerar en hostilidad permanente. Sí, puede decirse que, para muchos, es una señal de la existencia de graves fisuras en el orden social, una ruptura del proceso político que surge en contextos de incertidumbre y ansiedad, que justamente es lo que se debería estudiar con más profundidad.

Sin poder resolver aún lo de la caracterización de este fenómeno, bien podríamos en primer lugar, reconocer su existencia y la posibilidad de que ocurra, cuando todos sabemos que estamos en situaciones permanentes de crisis institucional y de valores, con dimensiones realmente preocupantes. En segundo lugar, contar con un sistema institucional de información prospectiva relevante. Por último, ocuparnos de los temas y aspectos del control de la violencia por parte de las fuerzas del Estado para no caer en el sobredimensionamiento del uso de la fuerza y en situaciones de afectación a los Derechos Humanos.

Para eso contamos con normativas claras establecidas en los convenios internacionales a los cuales el Ecuador está suscrito. Las Naciones Unidas, La Cruz Roja y la Media Luna Roja, además de otras instancias como ACNUR difunden reiteradamente estas normas inscritas en los siete principios a los que se ha llegado: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. En el Código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley (policías especialmente, aunque el código también se aplica a militares cuando éstos se encuentran cumpliendo misiones de tal género) se reitera en las obligaciones que tienen los Estados, y en la responsabilidad de

- 01 EDITORIAL  
ESTALLIDO  
SOCIAL Y EMPLEO  
ADECUADO DE LA  
FUERZA

- 02 LA TRATA DE  
PERSONAS;  
MERCADO ILÍCITO  
DEL CRIMEN  
ORGANIZADO  
*Andrea Giménez-Salinas  
Framis*

- 06 LA MINERÍA ILEGAL:  
APUNTES SOBRE  
UNA COMPLEJA RED  
CRIMINAL  
*Adriana Aguilar Molina*

- 10 REPORTAJE: ECOS  
DEL PROGRAMA  
DEMOCRACIA  
SEGURIDAD Y  
DEFENSA-PUCEI  
*Equipo de redacción del  
Programa DSD*

- 13 CRONOLOGÍA  
Julio - Diciembre 2019

los gobiernos sobre aspectos claves para no incurrir en graves faltas a los derechos humanos.

Tales aspectos cubren tanto a la población involucrada como a los propios funcionarios cuyos derechos también pueden ser vulnerados. Entre ellos: mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios involucrados, considerando también que la amenaza a su vida y a su seguridad es una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. En cambio, esos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos. Por ello, resulta ineludible que las autoridades responsables ejerzan un control permanente de sus procesos de

selección, capacitación, calificaciones y conducta. Los gobiernos deben examinar continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas. Entre estas armas no deberían figurar armas incapacitantes, letales o que puedan ocasionar lesiones o muertes. Los funcionarios deberán contar con equipo auto protector y de transporte a prueba de bala. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos.

Algo muy importante para terminar, entre las disposiciones especiales figuran: los funcionarios encargados de cumplir la ley deben ser provistos de

directrices claras –podríamos puntualizar protocolos precisos, practicados y en revisión permanente– para no tener que acudir a improvisaciones. Igualmente las actividades de advertencia y aviso a la población.

1. Bertha García Gallegos, Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología, por El Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Profesora de la Escuela de Sociología y Ciencias Política de la PUCE. Directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa, PUCE.

2. Marina Farinetti, 2002, La conflictividad social después del movimiento obrero <https://www.nuso.org/media/articles/downloads/3088>

## LA TRATA DE PERSONAS; MERCADO ILÍCITO DEL CRIMEN ORGANIZADO

Andrea Giménez-Salinas Framis<sup>3</sup>

### INTRODUCCIÓN

La trata de personas, tráfico de personas o trata de blancas, como se llamaba antiguamente, constituye una grave vulneración de los derechos humanos ejercida por muchas organizaciones criminales como forma de obtener cuantiosas ganancias. Desde la perspectiva de los actores que se lucran con la explotación de las víctimas, importa analizar a las organizaciones o individuos que fomentan el negocio y participan en su desarrollo. Desde la perspectiva de la víctima, nos interesarán los derechos fundamentales, vulnerados con un engaño que termina con una explotación.

Nos encontramos en primer lugar ante un delito que atenta gravemente a los derechos humanos, a diferencia de otros tipos de tráfico similares que atentan a otros bienes jurídicos, como el tráfico de inmigrantes (smuggling of immigrants). En segundo lugar, la Trata constituye un tipo de comercio o mercado ilícito desarrollado prioritariamente por organizaciones criminales, con el objetivo de generar un rédito económico. En tercer lugar, la trata de personas no es una conducta individual o puntual que se agota en un hecho concreto, sino que se trata de

un proceso con distintas fases, donde participan un buen número de personas de forma coordinada y necesaria para que se produzca el delito (Zhang, 2007; Scarpa, 2008).

Respecto a su definición, existe un consenso internacional marcado por la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 15 de noviembre de 2000, y sus protocolos anexos. En la definición aportada por el Protocolo sobre Trata de personas se incorporan tres elementos esenciales (Villacampa, 2010): a) la acción: un comportamiento objetivo consistente en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas. b) Los medios empleados: en este caso, a través de amenazas, uso de la fuerza o coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de la situación de vulnerabilidad o recepción de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima; y c) la finalidad que consiste en la explotación de la víctima, el principal objetivo. La explotación final de las víctimas puede ser de diversos tipos: sexual, laboral, tráfico de órganos, servidumbre, etc.

**DISTINCION ENTRE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES**

El tráfico de inmigrantes (en inglés, alien smuggling) es un fenómeno que fácilmente se confunde con la trata de personas por las siguientes semejanzas: es un mercado ilícito del crimen organizado, explotado por organizaciones criminales que persiguen el lucro económico con el comercio de seres humanos (concretamente emigrantes). Por otro lado, su génesis también se encuentra en las desigualdades económicas y sociales entre los países, que obligan a un gran número de personas a buscar empleo y expectativas laborales en otros más prósperos. Finalmente, ambos fenómenos suelen implicar, generalmente, un proceso de traslado de personas de un lugar geográfico a otro, con el objetivo de obtener pingües beneficios.

Sin embargo, no todo son similitudes entre la trata y el tráfico de inmigrantes, existen grandes diferencias que justifican su identidad singular: a) el consentimiento de la víctima es distinto en ambos fenómenos, en el caso de trata suele haber engaño; b) la existencia de explotación a la víctima de carácter sexual, laboral o servidumbre, que solo se produce en el fenómeno de trata; c) la condición de víctima de la persona objeto de trata que, en el caso del tráfico de inmigrantes, constituyen clientes

que contratan conscientemente los servicios de una organización criminal; d) la situación laboral de la víctima en el país de destino que suele estar abocada a la explotación, en el fenómeno de la trata. Y, por último, d) la transnacionalidad

que caracteriza al tráfico de inmigrantes, que no siempre se exige en el caso de la trata (puede también darse este fenómeno en el mismo país o región). La tabla a continuación resume las diferencias entre ambos conceptos:

**Tabla 1. Diferencias entre la trata y el tráfico ilícito**

Trata de seres humanos	Tráfico ilícito de inmigrantes
Existe consentimiento de la víctima obtenido bajo amenaza, uso de la fuerza, coacción, etc.	Existe consentimiento del inmigrante que contrata los servicios por entrar ilegalmente en el país de destino
La finalidad es la explotación de la víctima	La finalidad es la entrada ilegal del inmigrante a cambio de un precio
Las personas traficadas son víctimas y la trata constituye una grave violación de los derechos fundamentales	Inmigrantes ilegales no son víctimas y lo que se vulnera son las leyes de inmigración de un país de forma consentida
La víctima está controlada y sometida a aislamiento	El inmigrante es libre en el país de destino
Puede ser un proceso internacional o nacional	Siempre se cruza una frontera

Fuente: Adaptado de Aronowitz (2009).

## EL PROCESO DE TRATA DE PERSONAS Y SUS FASES.

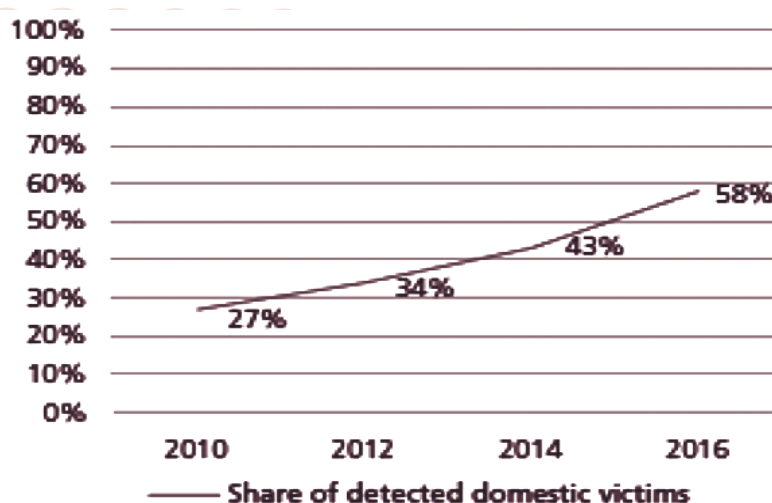
El proceso incluye actividades en diferentes fases: captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas.

**Fase de captación.-** El proceso de trata suele iniciarse con una primera fase de captación, identificación y contacto con víctimas vulnerables. La identificación de víctimas puede realizarse a través de diferentes medios: por contactos personales o de amistad; a través de agencias de viajes o de modelos que encubren redes de trata; por medio de supuestos enamorados que prometen a las víctimas una historia de amor en lugares económicamente más prósperos, etc. En

las situaciones más graves, se fuerza y coacciona a la víctima en lugar de tentarla con ofertas jugosas, incluso llegando al secuestro o la captación por medio de violencia.

**Fase de transporte.-** Según el Informe de Naciones Unidas de 2018, cerca del 40% de las víctimas de trata deben trasladarse de un país a otro y, el 58% de ellas, son víctimas de trata doméstica, producida en el mismo país (UNODC, 2018). Por ello, el viaje hacia el lugar de destino, donde supuestamente encontrarán el trabajo deseado, puede realizarse en distintos medios de transporte, según la distancia recorrida y los controles intermedios. Respecto al transporte, existen grandes diferencias según las culturas y destinos.

**Figura 1. Porcentaje de víctimas detectadas de trata doméstica, 2010-2016**



Fuente: Global Report in Trafficking in Persons (2018).



**Fase de explotación.-** La última fase constituye la verdadera finalidad de la actividad ilícita: rentabilizar la inversión realizada por el traslado de la víctima desde el país de origen al país de destino y materializar la deuda contraída. Los tratantes, a partir de las infraestructuras existentes en los países de destino, proceden a la explotación de las víctimas con sus propios medios o las venden a otras organizaciones que posean los recursos necesarios para explotarlas de forma sexual, laboral u otro tipo de servidumbre. Sin embargo, las pautas de explotación dependen mucho de las organizaciones criminales y el origen étnico de los autores (Aronowitz, 2009).

### FACTORES ESTRUCTURALES QUE FACILITAN LA TRATA A NIVEL MUNDIAL

En actualidad, la trata de personas se ha convertido en un fenómeno global, que aprovecha la facilidad y movimiento internacional de personas y mercancías para desarrollarse de forma exponencial a lo largo y ancho del mundo. La concentración geográfica de los flujos de tráfico de personas está directamente relacionada con las condiciones favorables al desarrollo de este negocio motivado por incentivos económicos (beneficios para las organizaciones) y de seguridad (posibilidad de actuar en la clandestinidad e impunidad para los autores). Para explicar la génesis de la trata de personas debemos acudir, por un lado, a factores estructurales o macrosociales que constituyen el caldo de cultivo para la emergencia de este mercado ilícito a nivel mundial. En segundo lugar, a factores de vulnerabilidad individual que aumentan la oferta de trata por parte de una población especialmente vulnerable.

Además de las desigualdades económicas entre los países y la pobreza de la población, en el interior de los países pueden existir grandes desigualdades entre sectores poblacionales. Entre los grupos más castigados por la desigualdad social y económica se encuentran las mujeres, las personas enfermas o discapacitados, los menores y las personas mayores. Según el Banco Mundial, los países con mayor índice de Gini o desigualdad económica, en datos del 2011 al 2017, son países latinoamericanos como: Colombia (49,7), República Dominicana (45,7),

México (48,3), Panamá (49,9), Haití (41,1) y Paraguay (48,8); países africanos como Zambia (57,1), Rwanda (43,7), Senegal (40,3), Madagascar (42,6) y países del Este de Europa como Georgia (37,9).

### LA MUJER COMO GRUPO SOCIAL DE RIESGO

En los países afectados por la pobreza y la desigualdad, las mujeres suelen estar en seria desventaja frente a los hombres a la hora de encontrar empleo. Existen razones de tipo cultural y social que impiden este reparto equitativo de oportunidades laborales, sociales y económicas entre ambos sexos, y explican por qué la mujer se ve condicionada en mayor medida a buscar ayuda fuera de sus fronteras para conseguir una posición económica sostenible. Entre las razones de tipo cultural que permiten esta desigualdad, encontramos condiciones de marginalización por razón de pertenencia a alguna etnia concreta o a una familia monoparental, relaciones paternas autoritarias que infravaloran la condición de mujer, patrones culturales o tradiciones como la venta de hijos o envío de los hijos a familiares lejanos, etc. También suelen presentarse razones sociales como la falta de escolarización, desempleo juvenil, las condiciones de seguridad del barrio o comunidad, etc.

**Conflictos políticos o armados y desastres naturales.-** Según la historiadora americana Wendy Goldman, después de una guerra civil, gran número de personas, especialmente mujeres, deben abandonar sus trabajos y profesiones enteras se ven despojadas de sus puestos de trabajo (personal médico, funcionarios, etc.). Después de que ocurre esto, los puestos de trabajo que se crean son preferentemente ocupados por hombres ya que carecen de menos cargas familiares. En este tipo de conflictos, la población menor también es más vulnerable, ya que después de un conflicto armado muchos de ellos viven en las calles en total abandono. Los desastres naturales como terremotos, maremotos, ciclones, etc., que afectan a poblaciones con escasos recursos. El desabastecimiento de la población, la imposibilidad de ofrecer los recursos públicos, la escasez de alimentos y productos de primera necesidad, el desorden y el caos administrativo generado, son

el caldo de cultivo para el desarrollo de la trata de personas, tanto de niños como adultos.

**Falta de regulación del mercado del sexo u otros mercados laborales como el servicio doméstico, etc.** Además de las condiciones favorecedoras de la emigración, existen otros aspectos relacionados con el ordenamiento jurídico que ofrecen oportunidades a las grandes organizaciones para el desarrollo del negocio de la trata. A pesar de que el mercado de la prostitución constituye uno de los negocios más antiguos, su práctica y desarrollo no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, ya que se sigue caracterizando por el oscurantismo y la clandestinidad. Esta situación de indefinición legal también se aplica a otros sectores laborales como el servicio doméstico o determinadas labores de baja cualificación. Las lagunas regulatorias, en este caso, son las causas de que estos negocios se desarrollen con gran impunidad.

**Disparidad de respuestas penales sobre la trata de personas.-** Desde el ámbito internacional, hace ya dos décadas que se viene alertando del fenómeno de la trata y sus consecuencias negativas para las víctimas. El año 2000 se elaboró el Protocolo “para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas” que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Desde entonces, muchos países han firmado el Convenio y sus protocolos y han establecido, en sus legislaciones nacionales, disposiciones que penalizan este tipo de conductas. Según el Informe sobre trata de personas de Naciones Unidas de 2016, el número de países que penalizaron la trata de personas casi se dobló entre 2003 y 2016 (de 73 a 134). Esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años y, en la actualidad, el 84% de los países tienen un delito relacionado con la trata (solo el 5% carece de legislación en la materia, nueve países) (UNODC, 2016).

### ¿QUIÉNES SE LUCRAN CON EL NEGOCIO DE LA TRATA DE PERSONAS?

En el año 2000 se comenzaron a detectar numerosos casos de trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, desarrollados

principalmente por organizaciones criminales que tenían una infraestructura más o menos estable (Rechea y Giménez-Salinas, 2001; Giménez-Salinas, 2007 y 2008). Una vez generado el negocio, a partir de rutas estables e infraestructuras disponibles, la ex-

pansión del mismo permite la entrada de sujetos individuales que participan en cualquier fase del proceso de trata y que buscan sacar un beneficio económico. Esta variedad de actores presentes en el negocio, desde individuos a grandes organizaciones, hace difícil

establecer un patrón estructural y funcional de las organizaciones.

**Tabla 2. Tipología de organizaciones según la infraestructura requerida en referencia a la distancia entre país de origen y destino**

	Trata doméstica	Trata intraregional	Trata interregional
<b>Distancia</b>	Distancias locales o cortas	Distancias intraregionales	Grandes distancias trans-regionales
<b>Tamaño grupo</b>	Uno o más tratantes	Grupos pequeños	Grandes grupos de crimen organizado
<b>Víctimas tratadas</b>	Bajo número de víctimas	Más de una víctima	Gran número de víctimas
<b>Inversión</b>	Escasa inversión y recursos	Pequeñas inversiones y beneficios según el número de víctimas	Grandes inversiones y beneficios
<b>Documentación</b>	Documentación no requerida	Cruce de fronteras (con o sin documentación)	Documentación requerida
<b>Recursos e infraestructura</b>	Poca organización requerida	Escasos recursos requeridos, algo de infraestructura para el paso de fronteras	Organización sofisticada para mover muchas víctimas y asegurar el éxito de las operaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNODC (2014).

El informe de Naciones Unidas sobre trata de personas establece una tipología de grupos criminales atendiendo a su complejidad, y a la distancia geográfica entre los países de origen y los países de destino. Según los análisis realizados para el informe (UNODC, 2014) sobre las víctimas detectadas entre 2010 y 2012, existe una fuerte correlación entre la proximidad geográfica entre los países de origen y destino, y la intensidad del flujo de personas traficadas entre ellos (a mayor proximidad, mayor número de víctimas traficadas entre los países). En base a estos resultados, se establece una tipología de organizaciones dedicadas a la trata de personas divididas

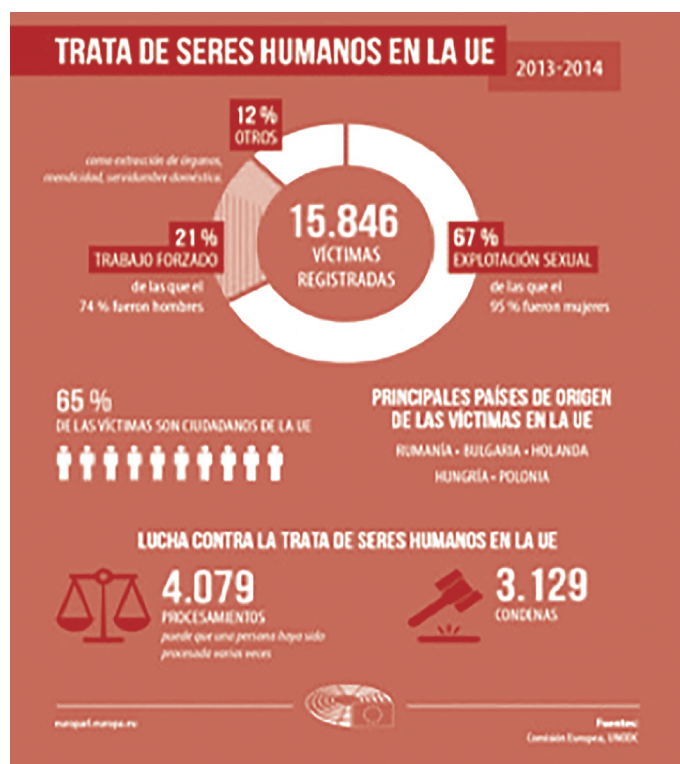
en tres tipos de trata (ver tabla 2).

### ¿QUIENES SON LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS?

A lo largo de la última década se han ido recogiendo datos sobre víctimas de trata identificadas por ONG's o instituciones que se encargan de su protección. Los datos más actualizados proceden del Informe de Naciones Unidas 2016 que, en total, han recogido información sobre 100.000 víctimas identificadas, procedentes de 80 países, entre 2010 y 2012. De las víctimas identificadas, la mitad son mujeres, el porcentaje de hombres ha ido aumentando (21%) y también el

de niños (30%). En Europa, según las estadísticas publicadas por Eurostat (2015) sobre víctimas identificadas en 2010, 2011 y 2012, el porcentaje de mujeres dentro de las víctimas es del 75% y el de hombres el 21%, siendo el 4% desconocido. Respecto a la edad, los datos de Eurostat de 2016 muestran que, el 76% eran mujeres, y el 15% niños, siendo el resto hombres adultos. A continuación se muestra un gráfico resumen de las principales tendencias en la Unión Europea.





Fuente: Eurostat, 2016.

Las víctimas identificadas proceden, en su mayoría, de países de la Unión Europea (65%). Según los datos de Eurostat 2016. El 39% restante procede principalmente de Rumanía, Bulgaria, Holanda Hungría y Polonia.

### FACTORES DE VULNERABILIDAD INDIVIDUAL, SOCIAL Y FAMILIAR

**Ausencia de estatus civil por falta de registro al nacer:** algunas localidades carecen de registros de nacimientos estandarizados y recogidos de forma rigurosa.

**Mayor vulnerabilidad al engaño:** alrededor del 75% de las mujeres no adquieren conciencia de que van a ser forzadas a la prostitución. Asimismo, numerosos estudios sobre prostitución (Noguerol, 1997) señalan al maltrato o abuso sexual anterior -abuso sexual en la infancia- como un factor de riesgo para el desarrollo posterior de conductas sexuales disfuncionales. Antecedentes de prostitución en la familia también constituye un factor de vulnerabilidad el haber tenido algún miembro de la familia implicado en la prostitución.

**Pertenencia a minorías étnicas o marginación:** pueden conducir a un proceso de trata como forma de eludir y superar las consecuencias sociales y económicas padecidas por dicha marginación. Esta situación se agrava por situaciones económicas y patrones culturales, en ocasiones son los padres de las menores quienes se ven tentados por los traficantes ante situaciones de precariedad.

**Abandono familiar de las víctimas potenciales:** las mujeres todavía jóvenes o menores pueden padecer una situación de abandono familiar y desatención por diferentes motivos.

**Conflictos militares o utilización de niños o mujeres para la guerra:** en lugares afectados por conflictos armados muchos niños son secuestrados y obligados a integrarse en los ejércitos como soldados o forzados a realizar servicios sexuales para los adultos.

### CONCLUSIONES

La trata de personas constituye un mercado ilícito propio del crimen organizado. Como tal, tanto la oferta como la demanda son dos ejes fundamentales sobre los que actuar para reducir su amenaza. En el ámbito de la prostitución, una regulación adecuada del sector, así como una voluntad internacional de regulación homogénea, podrían frenar los abusos que se están produciendo en la actualidad como consecuencia de las lagunas y disparidades legislativas. Otros ámbitos laborales más vulnerables a la explotación como el agrícola, el servicio doméstico, la industria textil, etc. deberían verse también reforzados en sus inspecciones y controles para evitar abusos y malas praxis por parte de empresarios sin escrúpulos. Las organizaciones criminales que se lucran con este negocio ilícito poseen infraestructuras en las distintas fases del proceso de trata, localizadas en puntos geográficos concretos. Estas infraestructuras deberían ser nuestra mayor preocupación como forma de reducir los recursos y oportunidades disponibles para dichas organizaciones.

#### Bibliografía

3. Profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y Presidenta de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad.
- Giménez-Salinas Framis, A. (2008). El tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en los países de la Antigua Unión Europea. Estudios de Criminología II. Cuenca: Ediciones UCLM.
- Scarpa, S. (2008). Trafficking in Human beings: modern Slavery. Oxford: Oxford University Press.
- UNODC. (2018). Global Report on Trafficking in Persons. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Zhang, S. X. (2007). Smuggling and trafficking in human beings. All roads leads to America. Westport: Praeger Publishers.

## LA MINERÍA ILEGAL: APUNTES SOBRE UNA COMPLEJA RED CRIMINAL

Adriana Aguilar Molina<sup>4</sup>

### ANTECEDENTES

En un informe reciente del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), sede Ecuador, Alexander Madrigal (2019) propone abordar la minería criminal en los países andinos como un fenómeno de seguridad regional. El autor parte de la idea de que si bien la minería ilegal es un delito, se la debe diferenciar de la minería

criminal en la medida en que ésta se encuentra directamente relacionada al crimen organizado; es decir, a una serie de prácticas delictivas o delitos conexos. En concreto, sostiene que la falta de distinción entre ambas formas irregulares de minería ha provocado no sólo la invisibilización de las redes criminales, sino también respuestas institucionales efectivas (Madrigal, 2019)

Sobre esto último, cabe señalar que apenas en 2012 la Decisión 774, o la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), definió a esta actividad ilícita como un problema multidimensional que provoca graves daños en la región, convirtiéndose en la base jurídica para que los Estados empiecen a desarrollar legislaciones pertinentes (Madrigal, 2019: 11). En dicha Decisión, y recogiendo la problemática de que la minería ilegal es una amenaza que demanda acciones de seguridad transregional, los países miembros -Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- adoptaron siete medidas de cooperación:

1. Combatir el lavado de activos y delitos conexos provenientes de la minería ilegal;
2. Fortalecer mecanismos de control y trazabilidad de maquinaria, hidrocarburos, equipos e insumos, utilizados en la minería, así como del producto final de la misma;
3. Planificar y ejecutar operativos contra la minería ilegal mediante acciones coordinadas en zonas de frontera;
4. Colaborar en la identificación y persecución de quienes participen en aparatos o estructuras organizadas al margen de la ley para realizar minería ilegal y

delitos conexos;

5. Restaurar, remediar o rehabilitar ecosistemas transfronterizos afectados por la minería ilegal;
6. Implementar programas, proyectos y acciones para el combate a la minería ilegal y el desarrollo económico social en las Zonas de Integración Fronteriza;
7. Intercambiar experiencias sobre procesos para la formalización o regularización de la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional y sobre el combate a la minería ilegal (Decisión 774, 2012: art. 4).

Como se conoce, con la aprobación de la Ley de Minería en 2009 el gobierno de Rafael Correa, a través del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), y el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, inició un proceso de formalización de las operaciones mineras en varias provincias del país. Esto dio como resultado la dinamización y el crecimiento de la industria minera, que para 2015 representó USD 681.809 millones de exportaciones en oro<sup>5</sup> contabilizados por el Banco Central del Ecuador (Larenas, Fierro-Renoy y Fierro-Renoy, 2017: 72). Ver Tabla 1.

**Tabla 1. Ecuador. Precio y Volumen de Exportaciones de Oro**

Año	Exportaciones (Kg)	Exportaciones (Miles de US\$ FOB)	Valor Unitario (US\$/Kg)	PIB (Millones de US\$)	% PIB
2005	4.933	17.358	3.519	41.507	0.04
2006	4.943	34.453	6.971	46.802	0.07
2007	6.186	67.074	10.842	51.007	0.13
2008	836	16.398	19.611	61.762	0.03
2009	918	22.047	24.015	62.519	0.04
2010	1.258	33.866	26.932	69.555	0.05
2011	4.280	131.583	30.741	79.276	0.17
2012	10.790	392.282	36.357	87.924	0.45
2013	14.783	433.959	29.356	94.776	0.46
2014	28.573	1'002.067	35.070	100.917	0.99
2015	20.801	681.809	32.777	100.871	0.68

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.

**Según el Banco Central del Ecuador (2016), el mencionado dinamismo de las exportaciones de oro en Ecuador permite que el metal haya pasado a constituirse en el cuarto producto de exportación a partir de 2012, después del banano, camarón, cacao y sus elaborados; habiendo superado al atún y pescado, y al café y sus elaborados (2017: 73).**

Así, con el reconocimiento de la minería como un área estratégica para la economía ecuatoriana, y por tanto, con la ejecución progresiva de los cinco proyectos emblemáticos a gran escala: Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, San Carlos Panantza y Río Blanco (Banco Central del Ecuador 2017, 6-7) (Ver Tabla 2), esta actividad estaría siendo

capitalizada de forma exclusiva entre las empresas transnacionales -en su mayoría- y el Estado. Para 2021 se pretende que la exportación minera alcance el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), y se constituya como el segundo rubro no petrolero (El Telégrafo, 4 de junio 2019).“

**Tabla 2. Ecuador. Proyectos estratégicos de la actividad minera**

Proyecto	Provincia	Empresa	País	Tipo	Recursos	Vigencia
Mirador	Zamora Chinchipe, El Pangui, Tundayme	Ecua Corriente S.A.	China	Cielo abierto	Oro Plata Cobre	27 años
Fruta del Norte	Zamora Chinchipe, Yantzaza, Los Encuentros	Lundin Gold Inc.	Canadá	Subterránea	Oro Plata	13 años
Loma Larga	Azuay, Victoria del Portete	INV Minerales Ecuador S.A.	Ecuador	Subterránea	Oro Plata Cobre	27 años
San Carlos Panantza	Morona Santiago, San Juan Bosco y Limón Indanza	ExplorCobres S.A.	Canadá	Cielo abierto	Cobre	25 años
Río Blanco	Azuay, Cuenca, Molleturo y Chauca	Junefield Resources Ecuador	Ecuador	Subterránea	Oro Plata	11 años

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.

El proyecto Mirador, provincia de Zamora Chinchipe, de capitales chinos, inició su construcción el 23 de diciembre de 2015. Actualmente, con una inversión de US\$ 1400 millones, edifica una planta de beneficio donde se procesará el mineral para obtener concentrado de cobre que será exportado a China para su refinación. La Ley de Minería actual establece el pago anticipado de regalías para la minería a gran escala. EcuaCorriente S.A. negoció el pago anticipado de US\$ 100 millones, y hasta diciembre de 2016 se había desembolsado al Estado US\$ 70 millones (Larenas, Fierro-Renoy y Fierro-Renoy, 2017: 77).

#### “CIUDADES DE PLÁSTICO”: DE BUENOS AIRES A SHUMIRAL

Buenos Aires es una de las seis parroquias del cantón San Miguel de Urcuquí, perteneciente a la provincia de Imbabura, ubicada en la sierra norte ecuatoriana. Shumiral, en cambio, es una de las parroquias rurales del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, ubicado en la sierra sur ecuatoriana. Para la prensa, ambos lugares situados entre cerros y montañas dejaron de ser pequeños poblados dedicados a la producción agrícola y ganadera, para convertirse en asentamientos mineros ilegales, y criminales. En julio y agosto de 2019 los operativos allí realizados fueron catalogados como los más importantes del año.

Tanto en Buenos Aires como en Shumiral, la vida de los mineros dedicados a la extracción ilegal de oro -desde 2018- se desarrollaba principalmente en los campamentos improvi-

sados con carpas de plástico negro y estructuras de madera, conocidos como “covachas” o “cambuches”. En la primera parroquia, sin embargo, llegaron a trabajar miles de personas de otras provincias, así como migrantes venezolanos, colombianos, peruanos y haitianos, lo que atrajo la instalación de tiendas, ferreterías, bares y clubes nocturnos, y con ello, el despliegue de delitos como la explotación laboral y sexual, y la tenencia de armas y explosivos.

Desde inicios de 2019 se obtuvo evidencia de que en La Merced operaban grupos armados que protegían la extracción ilegal de oro, y que denuncias sobre otros delitos como el asesinato, el sicariato y el soborno, se incrementaron en la Fiscalía como actividades delictivas vinculadas a la minería ilegal; por lo que se redoblaron los operativos policiales en la zona. Por ejemplo, en un operativo del 2 de julio participaron 2.200 agentes, entre policías y militares; una semana antes hubo un enfrentamiento que dejó heridos, y se

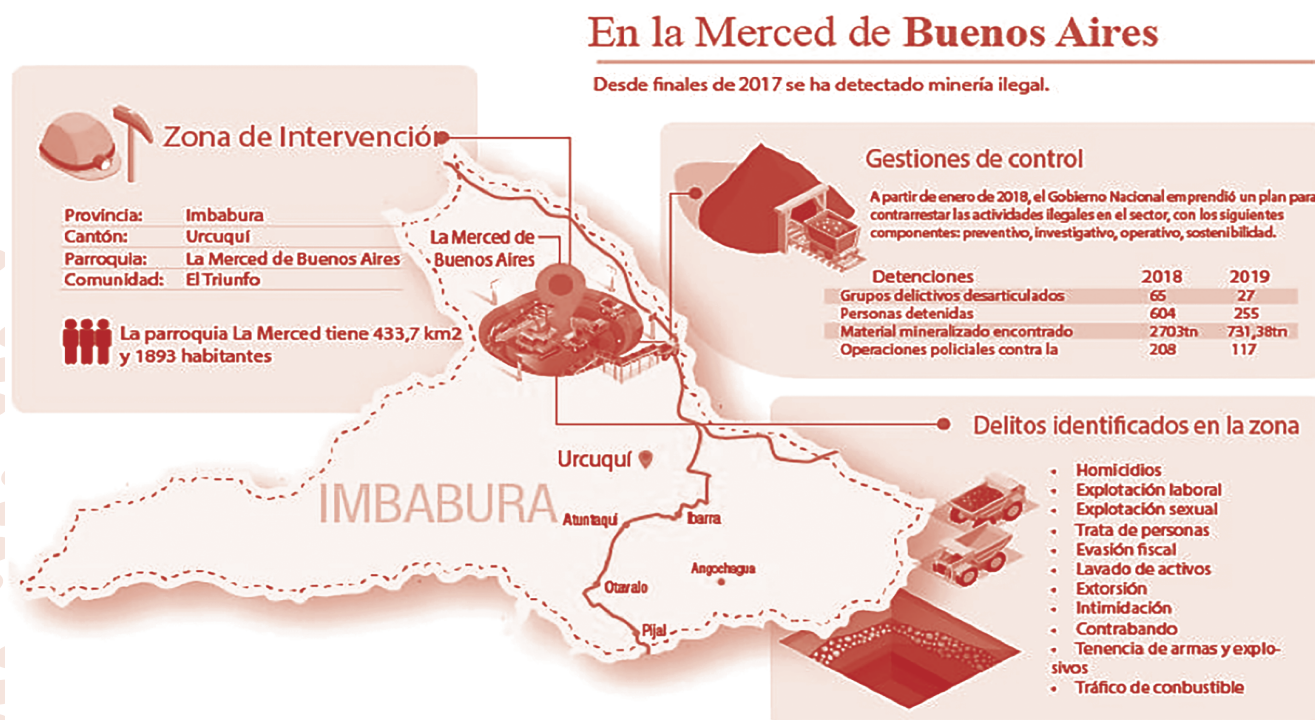


encontraron dos cadáveres sin relación inmediata con el incidente. Según la policía, entre el 2018 y 2019 se realizaron 325 operativos contra la minería ilegal (El Comercio, 2 de julio 2019).

Hay información que muestra cómo operan los denominados equipos de choque, que usan vehículos de alta gama y sin placas para proteger el material mineralizado. Se movilizan en las noches y madrugadas, pero también en el día, e intentan evitar a los policías. Mueven miles de dólares en efectivo. Los investigadores saben que hay grupos que viajan hasta con USD 150 000. Dicen que sirve para sobornar en las vías y agilizar el paso de las cargas ilegales y para pagar a la red de colaboradores (El Comercio, 10 de febrero 2019).

Aunque no se tienen nombres, la información periodística coincide en que debido al potencial minero de Buenos Aires, la infraestructura que allí se montó fue financiada por grupos irregulares o de delincuencia organizada, posiblemente por ex miembros de las FARC. Entre 2018 y 2019, se indica que se desarticularon 92 grupos delictivos, se detuvieron a 859 personas, y se decomisaron 3.474 toneladas y 350 vehículos (El Telégrafo, 2 de julio 2019) (Ver Figura 1). En el cerro Pucul de Shumiral, en cambio, los mineros huyeron un día antes del operativo policial-militar, por lo que únicamente se decomisaron 6 poleas para trasladar oro, 100 habitáculos, y 100 sacos con productos mineralizados (El Tiempo, 2 de agosto 2019).

**Figura 1. Delitos relacionados a la minería ilegal en La Merced, 2018-2019**



Fuente: El Telégrafo, 2019.

Haciendo un balance, todos los operativos militares y policiales realizados en varios puntos geográficos del país, consistieron en allanamientos a los centros de almacenamiento, incautaciones de toneladas de oro transportado en camiones, tráileres, tanqueros, volquetas y contenedores de gasolina; y en decomisos de dinero en efectivo, vehículos sin placa 4x4 -con vidrios polarizados y de alta gama-, municiones y materiales como la pólvora. La magnitud de estos datos revela que la extracción, el transporte y la venta ilegal de oro son parte de una compleja red de actores, que valiéndose de las políticas extractivas estatales, articulan otras prácticas delictivas para generar más ganancias.

Ahora bien, el Párrafo Primero de la Sección Quinta del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador (2014), establece diferentes penas privativas de libertad a las personas involucradas en actividades mineras ilegales, entre las que se incluye a las de tipo artesanal. Así por ejemplo, el financiamiento de suministros o maquinarias para la extracción ilícita de recursos mineros es sancionado con una pena de tres a cinco años; la extracción, explotación, exploración, aprovechamiento, transformación, transporte, comercialización y almacenamiento, que no cuentan con la autorización correspondiente, con una pena de cinco a siete años; y, los daños al ambiente, con una pena de siete a diez años.

(COIP, 2014: 41).

Sin embargo, este tipo de sanciones estarían focalizadas hacia el control y la autorización de las actividades mineras; y no estimarían otro tipo de acciones derivadas del incumplimiento de la misma, así como los vínculos que podrían tejerse alrededor o al margen de la ley. Por lo tanto, y al momento, se pensaría que no existe la suficiente claridad o intención jurídica para castigar a las redes criminales que operan más allá de la explotación laboral de los mineros ilegales, delitos que en el contexto ecuatoriano se incrementaron debido a las políticas extractivas iniciadas por el gobierno de la última década.

Con estos planteamientos, este reportaje presentó algunos apuntes para colocar en discusión la idea de que la minería ilegal es, en parte, consecuencia directa de las políticas económicas de los Estados, en este caso del ecuatoriano, pues el capital en juego incita disputas desde otros sectores. Es así que las actividades mineras que

operan por fuera de la ley son apenas la punta del iceberg de un cúmulo de delitos -en red- que afectan los ingresos económicos del gobierno de turno, pero también vulneran gravemente los derechos humanos, y de la naturaleza, cuyos daños muchas veces son irreparables.

#### Bibliografía

4. Socióloga con mención en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Maestra en Antropología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador, Investigadora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa (agosto-diciembre 2019).
5. Hasta 2015 las cifras provenían mayoritariamente de la pequeña y mediana minería en Napo, Imbabura, El Oro, Azuay y Zamora Chinchipe. Banco Central del Ecuador. (2016). Bienes. Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 56.
6. La minería artesanal tiene la pena mínima, de uno a tres años (COIP, 2014: 41).
- Banco Central del Ecuador. (2017). Reporte de Minería. Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica.
- Código Orgánico Integral Penal (COIP), 2014.
- El Comercio. (10 de febrero de 2019). Mafias operan alrededor de la minería ilegal en Buenos Aires.
- El Comercio. (2 de julio de 2019). La Policía llegó

a tres sectores de Buenos Aires en donde opera la minería ilegal, según Ministra.

-El Telégrafo. (4 de junio de 2019). Gobierno presenta alcances de nueva política minera 2019-2030.

-El Telégrafo. (2 de julio de 2019). Policía y FF.AA. ejecutan desmantelamiento de la minería ilegal en Buenos Aires.

-El Tiempo (2 de agosto de 2019). Shumiral estará bajo resguardo y en análisis.

Larenas, D., Fierro-Renoy Virginia y Fierro-Renoy Claudia. (2017). "Minería a gran escala: una nueva industria para Ecuador". *Polémica* 12, Año 5, pp.67-91.

-Madrigal, A. (2019). "Informe de investigación. La minería criminal en los países andinos: caracterización de un fenómeno de seguridad regional". Comité de Investigaciones, Universidad Andina Simón Bolívar, 1-32.

Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones, 2012.

## REPORTAJE: II FORO INTERNACIONAL SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y TRÁFICOS ILÍCITOS<sup>1</sup>

Equipo de redacción del Programa DSD<sup>2</sup>

### LA CONVOCATORIA

Entre el 9 y 10 de diciembre de 2019 tuvo lugar el II FORO INTERNACIONAL "CRIMEN ORGANIZADO Y TRÁFICOS ILÍCITOS" organizado por el Programa Democracia, Seguridad y Defensa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Observatorio de Narcotráfico del Real Instituto Elcano de España, en la ciudad de Quito. En la convocatoria previa, las organizadoras Bertha García Gallegos (PUCE) y Sonia Alda Mejías (RIE), habían manifestado que son muchos los argumentos para mantener espacios internacionales de discusión que convoquen a funcionarios de gobierno, especialistas académicos y miembros de las fuerzas de seguridad de distintos países para tratar los distintos aspectos que conciernen a estos desafíos.

Un primer Foro sobre crimen organizado se llevó a cabo en noviembre del 2018 en la UNAM, México. Allí se revisaron las dinámicas de los países productores, distribuidores y consumidores del mercado de cocaína. La expansión de las redes criminales alimentadas por el mercado internacional de las drogas y la amplia gama de ilícitos conexos -tráfico de personas y de armas, grupos armados no estatales, corrupción, asociaciones ilícitas, y otros- que distorsionan las lógicas del Estado y sus relaciones con la Sociedad, son temas nucleares del debate, pero el fenómeno no se agota en ellos.

De allí que para este II Foro, la propuesta giró en torno a examinar la capacidad institucional del Estado de Derecho para lidiar con el crimen organizado, específicamente sobre

la necesidad de fortalecer las instituciones frente a estas amenazas con particular implantación en América Latina. ¿Cuáles son los elementos de doctrina del Estado de Derecho en nuestras sociedades para manejar la conflictividad social y las políticas de Seguridad con democracia? ¿Cuáles son las capacidades del Sistema Jurídico, de las instituciones de Control, del Ministerio Público? ¿Existe una política criminal adecuada? ¿Cómo funcionan los sistemas de inteligencia y la cooperación entre las fuerzas de Seguridad del Estado con un acento en la integralidad como lo propone la Constitución? Son algunas de las interrogantes que se plantearon al debate.

Ya en la inauguración del foro, los organizadores resaltaron el esfuerzo común que ha representado no solo

por parte de las instituciones convocantes –PUCE y Real Elcano– sino también por parte de cada uno de los especialistas que participaron con su esfuerzo personal, sus ponencias y roles de moderación, además de las instituciones patrocinadoras. Entre ellas, la Asociación de Profesores de la PUCE, El Club de Oficiales de la Policía Nacional, la Fundación Friedrich Naumann, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla. Se destacó sobre todo la presencia de un público integrado por académicos, funcionarios públicos, operadores de los sistemas de seguridad y justicia.

## LOS DESAFÍOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN UN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN VS. DESGLOBALIZACIÓN

Al hablar de crimen organizado nos enfrentamos a una problemática cambiante en sus formas, y en sus tendencias, así como en las diversas modalidades de ocupación de espacios y contaminación de los ámbitos del Estado, de la política, la sociedad, a más de la implantación territorial que representan. No solo es la problemática del crimen organizado y tráfico ilícitos

la que, como fenómeno multidimensional, se transforma incesantemente; también lo hacen los contextos a nivel mundial, regional y local. Todos sabemos que América Latina ocupa un lugar importante dentro de este desarrollo, no solo por ser países productores, de tránsito o acopio del narcotráfico, sino por otras modalidades que han aflorado en estos años, como las asociaciones ilícitas a partir del manejo arbitrario de sistemas de contratación pública.

Según diversos especialistas en los temas del sistema internacional, el mundo está inmerso en una época de transición, caracterizada ya no por la globalización sino por la desglobalización, que en otras palabras, ha significado la pérdida de legitimidad y credibilidad de las instituciones del actual orden internacional, posiblemente en declive, sin que existan certezas sobre un nuevo orden por aparecer.

En este marco, vemos cómo se diluyen las ideologías, las posibilidades y tendencias de integración regional que hasta hace poco parecían vigorosas y prometedoras. Desde la crisis del 2008, el crecimiento económico se ha ralentizado, mientras crecen las expectativas sociales por todas partes. Algunos analistas avizoran un siglo XXI de enormes

convulsiones sociales. Los ciudadanos de todas partes quieren una vida mejor y más segura, pero los sistemas económicos hasta ahora existentes parecen haber llegado a sus límites.

Dentro de este gran desconcierto en el orden mundial, la fortaleza del Estado Nacional de Derecho aparece como un objeto privilegiado de nuestras preocupaciones. Es justamente el crimen organizado en sus variadas dimensiones y modalidades, el que lo amenaza desde adentro y desde afuera. Al debilitar a sus instituciones, los liderazgos políticos, su legitimidad social y sus capacidades reales para producir bienestar, protección y justicia.

Sin duda, los temas que se trataron en el II Foro no abordaron la problemática en toda su extensión, pero sí aspectos esenciales. En México, noviembre 2018, en la UNAM, durante el primer Foro se abarcaron temas como la significación económica global, las estructuras de los tráfico mundiales de la cocaína y el papel de América latina en esos entramados. En este II Foro, el desafío central estuvo orientado hacia el análisis de los motivos y causas por las cuales la institucionalidad del Estado, en general, está siendo gravemente afectada.

### PROGRAMA

Lunes 9 de diciembre de 2019 . PUCE/Auditorio Mayor del Centro Cultural

**Mesa 1. El Sistema de Seguridad Integral. Doctrina y retos pendientes para los Estados en un mundo global**

Dr. Alejo Vargas. Universidad Nacional de Colombia

Gral. Div. Walter Astudillo. Ejército del Perú

Dr. Adrián Bonilla. FLACSO, Sede Ecuador

Dr. Jörg Dehnert. Fundación Friedrich Neumann, Países Andinos

**Mesa 2. Políticas criminales y organismos anticorrupción**

Eco. Jorge Rodríguez. Comisión Nacional Anticorrupción, Ecuador

Dra. Andrea Giménez-Salinas. Universidad de Comillas, España

Dr. José Manuel Ugarte. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Gilda Guerrero. PUCE

**Mesa 3. El Estado frente al crimen organizado. Marco legal, capacidades institucionales especializadas**

Dr. Raúl Benítez. Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Juan Pablo Aguilar. USFQ

Dra. Carolina Sampó. Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Mtr. Daniela Solano. PUCE

**Presentación del Índice Global de Impunidad**

Dr. Carlos Juárez. Universidad de las Américas Puebla, México

Dr. Daniel Pontón. IAEN



**Martes 10 de diciembre de 2019 // Rancho San Vicente. Club de Oficiales de la Policía Nacional del Ecuador**

**Mesa 1. El papel de las instituciones de control y de gobierno frente al crim en organizado en Ecuador**

Dra. María Paula Romo. Ministra de Gobierno

Dr. Christian Lombeida. Fiscalía General del Estado

Dra. Bertha García. PUCE

**Mesa 2. Fuerzas de seguridad especializadas contra el crimen organizado**

TCrn. Luis Peláez. Guardia Civil Española

Dra. Yadira Gálvez. Universidad Nacional Autónoma de México

Gral. Insp. Patricio Carrillo. Policía Nacional del Ecuador

Dra. Sonia Alda. Real Instituto Elcano, España



"Expositores internacionales en el II Foro de crimen organizado".

En espera de ofrecer una relatoría más detallada del II Foro, y de editar lo más pronto posible el libro que contendrá todas las ponencias, en este documento nos limitamos a una exposición somera de los contenidos de las exposiciones y respuestas dadas al público. Efectivamente, un primer punto del debate tuvo que ver con las Estrategias de Seguridad que ahora llevan el nombre de Integrales, sin que exista todavía un real compromiso entre los países latinoamericanos sobre lo que significa la integralidad. La primera mesa se enfocó en esta temática crucial y es evidente que hay pocas coincidencias. Lo que sí está claro es que la discusión no debe abarcar aspectos de doctrina que sean ajenos al Estado de Derecho. Posiblemente sea útil no insistir en las antiguas asociaciones entre Seguridad y Desarrollo. Tampoco entender a secas que la Seguridad es multidimensional sin llegar a definir cómo esta condición debe ser gestionada.

Quizá con mayor nitidez, durante estos años, se reconoce que ha habido significativos avances en el ámbito europeo occidental, que entiende a las Estrategias Nacionales como modelos de gestión de la Seguridad, desde donde tomar medidas para luchar contra la criminalidad de diverso tipo, compartiendo diferentes niveles institucionales. Las Estrategias deben transmitir las prioridades de los poderes públicos que, además de perseguir la eficacia buscan la legitimidad, sin violar los derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado exige una coordinación interagencial, interoperativa y horizontal para no permitir interferencias de poderes corporativos. En definitiva, una arquitectura institucional del Estado de Derecho, y el primado de la legalidad.

La Mesa número dos trató el problema de la Corrupción. A este propósito resultaron de gran interés tanto la ex-

posición de las experiencias ciudadanas anticorrupción en el Ecuador como el análisis de las políticas italianas antimafia que han dejado lecciones importantes para la política criminal. De la misma forma, el tratamiento que se dio al tema de la inteligencia criminal, un debate de actualidad dado el estado de nuestros sistemas de inteligencia que parecen no cuajar en la región. Esta temática quedó reforzada con la presentación del Índice Global sobre la Impunidad, presentado por la Universidad de las Américas Puebla, México.

Una revisión de las vulnerabilidades institucionales del Estado en América latina fueron abordadas en la tercera mesa, enfocando sobre todo la problemática carcelaria y el sistema de la administración pública, este último poco abordado y visibilizado cuando se habla de las falencias del Estado en América Latina. Todo tipo de asociaciones ilícitas pueden tener cabida en los intersti-

cios dejados dentro de la arquitectura administrativa del Estado; el expositor, Juan Pablo Aguilar demostró cómo el sistema de contratación pública en el Ecuador ha favorecido las actividades ilícitas dentro de la vinculación entre la política y la empresa privada o pública.

Durante el segundo día de debate se puso de manifiesto la importancia de las instituciones de Estado en materia de lucha contra el crimen organizado. Las actividades que envuelven el crimen organizado tienen su base en el narcotráfico, pero se extiende hasta espacios insospechados de la actividad humana con potencial de generar ilegalidades. El papel que tiene en el Ecuador el Ministerio de Gobierno quedó expresado en la ponencia de la ministra María Paula Romo, una exposición detallada de los impactos de la problemática en la estabilidad jurídico-político del país, así como de los recursos de diverso género puestos en juego en los procesos de gestión que le corresponde. La presentación de la Fiscalía General del Estado estuvo a cargo del Dr. Christian Lombeida, director de asesoría jurídica de la institución, quien enfatizó sobre los desafíos y los cambios que se vienen haciendo para poner en marcha los delicados mecanismos institucionales de esta función primordial del Estado, con las atribuciones establecidas desde

la Constitución del 1998. Tales atribuciones colocan a esta institución como eje fundamental de las políticas criminal y procesal penal, en su transformación desde un sistema inquisitorio al actual acusatorio que cumple con las disposiciones de los derechos humanos acerca del debido proceso.

La última mesa del Foro estuvo dedicada a los temas del empleo de las fuerzas militares y policiales frente al crimen organizado. Este es un tema de enormes expectativas puesto que en los países latinoamericanos todavía no se llega a entender en toda su valía y extensión los conceptos de interoperabilidad e interagencialidad, entre las fuerzas del Estado, Policía, Fuerzas Armadas, fuerzas de inteligencia y contrainteligencia, aplicados a la lucha contra las estructuras del crimen organizado cuyas lógicas jurídicas remiten a la ilegalidad, a la vez que incluyen operaciones armadas de distinto tipo. La presentación del Teniente Coronel Luis Peláez de la Guardia Civil Española y del General Inspector Patricio Carrillo de la Policía Nacional del Ecuador señalaron los avances que en esta materia presentan estas dos instituciones, enclavadas en distintos orígenes históricos y en sociedades que guardan similitudes culturales, pero también diferencias.

Siendo modelos exitosos en sus respectivos países sobre todo por el carácter civil, armado, de alcance territorial nacional pero desconcentrado y especializado, que exhiben las dos instituciones en su estructura institucional, de todos modos nos señalan la necesidad de que cada país debe adecuar sus cuerpos de seguridad a sus necesidades orgánicas y cultura sin necesariamente copiar modelos ajenos.

Por último, por la complejidad de la situación de la seguridad en México, la exposición de la Dra. Yadira Gálvez, UNAM, fue una de las más esperadas puesto que trató sobre la creación de la Guardia Nacional para la lucha contra el crimen organizado en ese país, proyecto propuesto por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador. La expositora detalló con claridad los desafíos en la implementación de esta propuesta que inicialmente se pensó como una estructura civil en todas sus dimensiones, mientras que en la realidad corre el riesgo de degenerar hacia una estructura militarizada que, según la expositora y otros analistas, puede reproducir en su marcha, el mismo sobredimensionamiento del uso de la fuerza que han caracterizado a las políticas de seguridad de los últimos gobiernos mexicanos.

## CRONOLOGÍA DE NOTICIAS JULIO-DICIEMBRE 2019

### CRISIS CARCELARIA

**Las cárceles de Ecuador albergan más de 2800 foráneos, cifra que va en aumento:** Los principales países de origen son Venezuela, Perú, México y Colombia, según la Dirección de Rehabilitación Social. Se plantea convenios bilaterales para regresarlos a sus países. La medida contribuirá a reducir el hacinamiento en un 2%, que este año bordea el 42%. *El Comercio, 1 de julio de 2019.* **Cuarenta policías heridos por ataque de internos en cárcel El Rodeo de Portoviejo:** Después de ser atacados por los internos de la cárcel, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que los hechos se registraron durante una requisa, lo que provocó malestar entre los internos. El incidente dejó como saldo 3 policías heridos con lesiones

graves y 33 con lesiones leves. *El Comercio, 5 de julio de 2019.* **Gobierno renovó el estado de excepción en las cárceles, porque “aún persiste la conmoción interna”:** El presidente Lenín Moreno lo hizo mediante decreto ejecutivo 823 por la grave conmoción interna que aún persiste en los centros de rehabilitación del país. La Presidencia dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los centros de privación de libertad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, con la finalidad de mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia. *El Comercio, 15 de julio de 2019.* **El 19,6% de los presos puede acogerse a la prelibertad y salir de prisión:** En las cárceles de Quito, Guayaquil, Ambato, Lago Agrio, Ibarra, Babahoyo y Santo Domingo, hay quienes deben cumplir con el 60% o 40% de la sanción para poder aplicar a la prelibertad. Esto

representa el 19,6% de la población carcelaria, que en total es de 38 600 presos a escala nacional. *El Comercio, 6 de agosto de 2019.* **Procesados destruyeron 2 100 grilletes electrónicos en 3 años:** Los grilletes comenzaron a funcionar en el 2016 como alternativa a la prisión preventiva. Después de tres años, el Servicio de Rehabilitación anuncia que se ha destruido el 42% de grilletes. Estos deben ser usados en tres casos: cuando la procesada está embarazada o es responsable de un menor con discapacidad, cuando el sospechoso es de la tercera edad y cuando el individuo tiene una enfermedad incurable. *El Comercio, 11 de agosto de 2019.* **Los militares se mantienen en las cárceles de Guayaquil tras el estado de excepción:** Su labor era requisar a las personas y controlar el ingreso de vehículos. Lo mismo sucede en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8. Muchos prisioneros y sus familias



se quejan del estado en el que viven. *El Comercio*, 19 de agosto de 2019. **Detienen a banda que extorsionaba a presos de Cuenca, Azogues y Cañar:** Se desarticuló a una banda de extorsión y micro tráfico de droga, dirigida por internos de las cárceles de Cuenca, Azogues, y Cañar. Se detuvo a doce internos quienes, amenazaban y agredían a los privados de libertad para que sus familiares depositen dinero en cuentas particulares; ocho de Cuenca, dos de Cañar y dos de Azogues. Según el jefe político de Azuay, Xavier Martínez, a los reos se los vinculará por el presunto delito de crimen organizado. *El Universo*, 27 de septiembre de 2019.

## MINERÍA ILEGAL

**Presidente Lenín Moreno decreta estado de excepción en parroquia de Urcuquí, Provincia de Imbabura:** “Por grave conmoción interna” en la parroquia La Merced de Buenos Aires, Urcuquí-Imbabura, el decreto dispone la movilización de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales y de la Agencia de Regulación y Control Minero con el fin de detener los hechos violentos que han afectado a los derechos de los habitantes y a la seguridad del Estado. *El Universo*, 1 de julio de 2019. **Policías y militares iniciaron una operación conjunta en zona minera de Imbabura:** Tras el decreto de estado de excepción, un total de 1.200 policías y 1.500 militares acompañados de al menos 20 fiscales ingresaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, donde se han registrado varios delitos a partir de la minería ilegal y artesanal. La ministra María Paula Romo indicó que la intervención permanecerá durante los próximos días y se extenderán a todos los alrededores de la zona. *El Universo*, 2 de julio de 2019. **Lenín Moreno decretó estado de excepción en Buenos Aires, Imbabura, por minería ilegal; dice que allí hay crímenes, explotación laboral y sexual.** La decisión se tomó “por la grave conmoción interna” y por los hechos de violencia ocurridos en ese lugar. En el documento se menciona que existen 10 000 personas dedicadas a la minería ilegal lo cual ha desatado otros delitos graves como explotación sexual, laboral y conformado organizaciones criminales. El decreto

durará 60 días. *El Comercio*, 1 de julio de 2019. **Operativo conjunto de policías y militares contra minería ilegal se aplica en Buenos Aires:** Un equipo de 1200 policías, 1200 militares y 20 fiscales ingresaron en un operativo conjunto a la parroquia la Merced de Buenos Aires. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que el propósito es ejercer control territorial y precautelar la seguridad ciudadana en la zona. *El Comercio*, 2 de julio de 2019. **Un mil doscientas personas desalojaron las minas ilegales de Buenos Aires:** 2400 miembros de la fuerza pública iniciaron los operativos para retomar el control de la parroquia de Buenos Aires en Imbabura. Durante las primeras horas del operativo, desalojaron al menos 1200 personas y 16 fueron detenidas. Estos operativos se amparan en el decreto de estado de excepción vigente por 60 días. *El Comercio*, 3 de julio de 2019. **Veinte personas detenidas en mina ilegal de Buenos Aires durante los primeros días de operativos:** Según la ministra del Interior María Paula Romo, los operativos militares y policiales continuarán durante algunas semanas más. La funcionaria dijo que investigan la identidad de los cabecillas de los grupos que explotaban la mina. Según la ministra, en la zona vivían hasta 15.000 personas y se han reportado innumerables casos de trata laboral y sexual. *El Universo*, 3 de julio de 2019. **Buenos Aires desalojado casi por completo:** El Ministerio del Interior en los primeros días del operativo “Nuevo Amanecer”, instó a los foráneos y pobladores de Buenos Aires a desalojar de manera voluntaria la zona en los buses que tenían como destino el terminal de Ibarra. Las minas ilegales van quedando desalojadas y el GIR, GOE y UMO y 120 policías investigadores realizaron las pericias técnicas en la parte alta de las minas de Buenos Aires y el rastreo de posibles cuerpos enterrados en ese lugar. *El Universo*, 6 de julio de 2019. **La minería ilegal devastó el bosque de Buenos Aires:** Bosques nativos del área de Limón, donde primaban especies nativas como cedro, canelo, olivo, etc., han sido afectados desde el descubrimiento de yacimientos de oro que se explotaron de manera ilegal desde noviembre del 2017. Marcelo Méndez, director de Ambiente del Municipio de Urcuquí, explica que

durante las primeras inspecciones funcionarios del Ministerio del Ambiente (MAE), Secretaría del Agua y Agencia de Regulación Minera, entre otras, detectaron junto a las minas problemas ambientales como deforestación, desbanque de la montaña, y contaminación de ríos y tierra. *El Comercio*, 25 de octubre de 2019. **Minería ilegal, grupos armados y migración afectan a la frontera:** Tanto en San Lorenzo al norte de Esmeraldas, como en el Carchi, existen permanentes controles de militares para evitar la migración y otros actos ilícitos. El comandante del Ejército, Javier Pérez, señaló que los 6000 militares que patrullan la frontera norte han combatido episodios de minería ilegal y atentados terroristas en San Lorenzo, donde se confiscó dos camionetas con 4500 balas. En Buenos Aires, Imbabura, la Policía reforzó la unidad para combatir la minería ilegal, desalojó a cerca de 6000 personas que extraían oro, y se detuvo a 26 personas. *El Comercio*, 8 de septiembre de 2019.

## OPERATIVOS ANTINARCÓTICOS

**Incautan en Francia más de una tonelada de cocaína en cargamento proveniente de Ecuador:** Tendría un valor de alrededor de USD 82 millones, esto la hace la incautación más relevante del año. Estuvo en un cargamento de cogollos de palmitos provenientes de Ecuador. El peso total fue de 1 066,5 kilos de cocaína. *El Comercio*, 14 de agosto de 2019. **Asalto a estudiantes en Portoviejo llevó a descubrir un laboratorio de droga cerca a Universidad Técnica de Manabí:** Diez policías llegaron al lugar buscando a los responsables del robo pero, en vez de eso, encontraron un laboratorio clandestino. No encontrar a nadie, por lo que no hay detenidos. Un miembro del GOM dice que en el lugar se envasaba y almacenaba la droga para luego comercializarla. *El Comercio*, 15 de agosto de 2019. **Operación conjunta entre Policía de Ecuador y Colombia incauta una tonelada de explosivos en la frontera entre Ecuador y Colombia:** La información indica que las armas y los explosivos encontrados pertenecerían al grupo armado organizado residual “Los Contadores”. Sin embargo, no hubo detenidos en el operativo. *El Comercio*, 19 de agosto de 2019. **Narcotráfico,**



**la justicia naufraga en la “duda razonable”:** En una urbanización privada por Lomas de La Prosperina, en Guayaquil, fueron hallados 741 kilos de cocaína. En ese operativo fue aprehendido el ex policía Jorge Fernando L. M., conocido con el alias de “Vanila”, quien presenta detenciones en el 2006 por tentativa de asesinato, estafa, asociación ilícita, y tenencia de armas. Pero el pasado 18 de agosto, fue el único de la banda declarado inocente por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, conformado por los jueces Gabriel Enrique Noboa Icaza, Edwin Walberto Logroño Varela y Segundo Gavino Mina Sifuentes. *Plan V, 2 de septiembre de 2019.*

**Ecuador, país no productor que más decomisa droga:** El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Diego Tipán, en presentación de Informe sobre Políticas de Drogas de Ecuador de la Comisión Interamericana para el Control y del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (Cicad - OEA), mencionó que el Ecuador ha retirado del mercado mundial más de 500 toneladas de sustancias sujetas a control y fiscalización, convirtiéndolo en el país no productor que más droga retira del mercado ilícito a nivel mundial. *El Universo, 27 de septiembre de 2019.*

**El tráfico de armas por Ecuador, una realidad que va en aumento:** Según investigación de Plan V, en los últimos años la incautación de armas ha ido en aumento. A finales de agosto, la Policía interceptó una camioneta con 4.725 municiones en el sector oeste de Santo Domingo; ésta aseguró que las municiones entraron al Ecuador por Perú y que su destino era San Lorenzo, Esmeraldas. También, dentro del mismo operativo ejecutado entre el 27 y 29 de agosto se decomisaron 100 armas de fuego, 89.000 dólares falsificados y un total de 5.400 municiones. *Plan V, 30 de septiembre de 2019.*

## DISIDENCIAS DE LAS FARC

Durante el operativo “Operación Demonio”, se detuvo a Alberto C., buscado por la Policía por ser integrante del grupo disidente “Oliver Sinisterra”. Alberto C., tenía orden de captura emitida por el Juez de Garantías Penales del Guayas por el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con la Policía, el detenido también

estaría involucrado en actividades ilícitas en las minas ilegales ubicadas en el cantón San Lorenzo, en complicidad con alias “Minerben”. *El Comercio, 29 de julio de 2019.*

**Capturado en Colombia un disidente de las FARC implicado en asesinato de equipo de prensa de El Comercio:** Las autoridades colombianas capturaron a un disidente de las FARC que podría estar relacionado con el asesinato de la pareja ecuatoriana y el secuestro del equipo de El Comercio. El detenido Yeison Cortes, alias Chuky, fue parte del equipo de seguridad de Arizala, alias “Guacho”, por tanto, integrante de la banda “Oliver Sinisterra”. *El Comercio, 11 de agosto de 2019.*

## POLICÍA / FUERZAS ARMADAS

**Las reformas al COIP buscan reforzar sistema de seguridad ciudadana:** El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal está el tema de seguridad ciudadana. Litardo dijo que hay una propuesta para respaldar a la Policía durante sus procedimientos. Dentro de las reformas que entraron en debate están el control de armas blancas. Al momento “la legislación no permite que la Policía retire las armas si es que no han sido usadas”, dijo la Ministra. *El Comercio, 15 de julio de 2019.*

**Ecuador invirtió 355 millones de dólares en últimos 2 años en Fuerzas Armadas:** Presidente Moreno reveló que en los últimos dos años el Estado ha invertido USD 355 millones en las Fuerzas Armadas. No mencionó si la cifra incluía el presupuesto anual de las Fuerzas Armadas. La inversión, dice Moreno, ha estado orientada hacia programas de protección del territorio, debido al deterioro de la seguridad en la frontera norte. *El Comercio, 8 de agosto de 2019.*

**La Policía requiere seguridad jurídica, no solo discursos de la Ministra Romo:** La policía cumple el rol de proteger “los derechos, libertades y garantías” de los ciudadanos ecuatorianos, esto significa que están autorizados a utilizar la fuerza para cumplir con su deber. Los límites de la fuerza que pueden aplicar están dados por los derechos humanos. Los derechos de los policías también deben ser protegidos por un marco legal claro. “El policía debe sentirse respaldado para no necesitar recurrir a las patadas

como medio de protección.” *Plan V, 21 de agosto de 2019.*

**Militares asumen control de armas en plan contra delincuencia en Ecuador:** El general Roque Moreira señaló que las Fuerzas Armadas asumen el control del porte de armas para apoyar a los patrullajes policiales en contra de la delincuencia. La orden consiste en que los militares deben apoyar las actividades policiales que se enfrentan a delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción, violencia y piratería. *El Comercio, 30 de agosto de 2019.*

**Comandos ecuatorianos entrenan en Israel tras reacercamiento militar:** Las Fuerzas especiales ecuatorianas reciben cursos de lucha antiterrorista en España e Israel. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, mencionó que estos cursos son necesarios para reforzar capacidades y enfrentar amenazas futuras, para evitar sucesos como los del año pasado, en los que un grupo disidente de las FARC mató a cuatro militares y cinco civiles en una cadena de atentados y secuestros. Según la ficha de Israel en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ecuador ha adquirido sistemas de defensa israelíes por hasta USD 30 millones. *El Comercio, 12 de septiembre de 2019.*

**Jefe militar advierte con “identificar, aislar y neutralizar a delincuentes y terroristas”:** El director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel, señaló necesaria la defensa de la soberanía territorial frente a la amenaza de delincuentes y terroristas, donde se los identificarán, aislarán, y neutralizarán para ser entregados a las autoridades competentes. Por ello, hay que revisar las leyes y realizar inversiones en equipamiento para beneficio de la seguridad de los ecuatorianos. *El Comercio, 29 de octubre de 2019.*

## RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS

**Naves de Estados Unidos llegarán una vez al mes a Galápagos:** El Ministerio de Defensa anunció que dos aviones de EE.UU., Orion P3 y Awac, llegarán a Galápagos para realizar intervenciones militares en contra del narcotráfico y la pesca ilegal. La Dirección de Aviación Civil (DGAC) entregó al Ministerio de Defensa 10 000 m<sup>2</sup> de terreno de la isla San Cristóbal para remodelar la infraestructura de la pista y las instalaciones del aeropuerto. El ministro, Oswaldo Jarrín, recaló que

el verdadero enemigo es el narcotráfico. *El Comercio*, 27 de septiembre de 2019.

## PARO NACIONAL

**Ministerio de Defensa: “no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen, no hay que agredir a los militares”:** En una entrevista emitida como cadena nacional el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, mencionó la falta de respeto a la autoridad pues, existen diferentes ataques a los miembros de las fuerzas del orden. Para Jarrín, las Fuerzas Armadas pueden apelar como cualquier otro ciudadano a su derecho a la autodefensa, advirtiendo así que no se provoque ni desafíe a la fuerza pública. *El Comercio*, 6 de octubre de 2019. **Quito declarado en emergencia:** El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Jorge Yunda, declaró en emergencia a la ciudad, esto permite a la administración municipal estar activa con los servicios básicos frente a la situación que atraviesa la capital debido al ingreso de manifestantes. Yunda comentó que se están atacando los bienes patrimoniales y asaltando a las entidades públicas. *El Universo*, 7 de octubre de 2019.

**Militares y policías desalojan a manifestantes que tomaron el Congreso de Ecuador:** Durante las protestas por la eliminación de subsidios a los combustibles en Ecuador, manifestantes asaltaron la

sede del Congreso de Quito. Alrededor de cien indígenas lograron pasar los cercos de seguridad pero fueron desalojados por militares y policías. *El Universal*, 8 de octubre de 2019.

## TERRORISMO E INSURGENCIA

### Ataque a instalaciones de la Contraloría deja 33 personas procesadas por el delito de terrorismo:

Tras la destrucción del edificio de la Contraloría, debido a incendios, provocados por manifestantes, 27 mayores de edad fueron procesados bajo el delito de terrorismo. La jueza de flagrancia, Eliana Carvajal, ordenó para 14 de ellos prisión preventiva, mientras que para los 13 restantes definió las medidas cautelares y la prohibición de salida del país. *El Universo*, 13 de octubre de 2019. **Protestas obligan a militarizar Ecuador:** La orden fue dada por Lenín Moreno cuando las manifestaciones se tornaron violentas y manifestantes atacaron una televisora nacional, un diario, vehículos y el bloqueo casi total de la capital, además de la quema del edificio de Contraloría Nacional. Las Fuerzas Armadas se encargarán de restringir la movilidad en zonas estratégicas en todo el país. *El Universal*, 13 de octubre de 2019.

### Amnistía Internacional instó a la OEA a verificar si hubo violaciones a los derechos humanos durante las

**manifestaciones:** Sostuvo que Ecuador pretende borrar y olvidar las violaciones de derechos humanos por parte de la Policía y el Ejército. *El Universo*, 16 de octubre de 2019. **Ministerio de Defensa de Ecuador anuncia “directiva” contra insurgencia:** Durante acto cívico el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, emitió una nueva directiva de seguridad para afrontar la insurgencia en el país; presentando así al nuevo jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., Luis Lara, y al nuevo comandante del Ejército, Luis Altamirano. Indicó que con esto se busca mejorar la protección de la población, el patrimonio, y la infraestructura. *El Universo*, 22 de octubre de 2019. **Para Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa, las universidades fueron centros de abastecimiento para manifestantes:** En la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó que las universidades, fueron centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaron vandálicamente durante las protestas que duraron once días en el país. Dijo que “se trató de una planificación perfectamente establecida, con una organización de tipo militar, destinada al derrocamiento del gobierno”. *El Universo*, 23 de octubre de 2019.



Pontificia Universidad  
Católica del Ecuador

#### Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Marco Romero Cevallos

#### Asesoramiento Internacional:

- Dra. Sonia Alda - Real Instituto Elcano - España
- Dr. Gustavo Suárez Pertierra - UNICEF - España
- Dr. Louis Goodman - American University (USA)

#### Investigadores:

- Adriana Aguilar Molina
- María Luisa Rivadeneira
- Daniel Cabrera Borja

## Programa Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

Teléfonos: (593-2) 299 1041 / (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Este boletín forma parte de los proyectos de vinculación con la colectividad de la PUCE

Correspondencia y solicitud de ejemplares: programa.dsd.puce@gmail.com

